



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I. ¹, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés

| | |
|--------------------|--|
| Radicación n°. | 05001 31 03 007 2019 00347 02 |
| Proceso. | Verbal – Pertenencia |
| Demandantes. | Inés Lucía Vélez González, Martha Norha Ríos Vélez, Martha Cecilia Vélez Serna, Miguel Antonio Carvajal García y Carlos Alberto González Ramírez |
| Demandado. | Personas indeterminadas |
| Procedencia. | Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín |
| Decisión. | Revoca rechazo |
| Tema. | Requisitos para la admisión de demanda |
| Rdo. interno. | 051-22 |
| Interlocutorio No. | -23 |

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del 17 de junio de 2022, mediante el cual se rechazó la demanda de Verbal de pertenencia formulada por Inés Lucía Vélez González, Martha Norha Ríos Vélez, Martha Cecilia Vélez Serna, Miguel Antonio Carvajal García y Carlos Alberto González Ramírez frente a personas indeterminadas.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Presentaron Inés Lucía Vélez González, Martha Norha Ríos Vélez, Martha Cecilia Vélez Serna, Miguel Antonio Carvajal García y Carlos Alberto González Ramírez, demanda verbal de pertenencia en contra de personas indeterminadas, pretendiendo se declarara que habían adquirido por prescripción extraordinaria de dominio, el inmueble con matrícula

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

inmobiliaria No. 01N-28204 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en los porcentajes que se indican en el mismo escrito introductorio.

Para tal efecto, se efectuaron la relación de todas y cada una de las negociaciones realizadas sobre el referido bien, que fueron inscritas en el citado folio de matrícula, a partir de la adjudicación de la posesión material que dentro del trámite de la sucesión Ezequiel Vélez en sentencia proferida el 27 de septiembre de 1962 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, protocolizada mediante Escritura pública No. 365 del 31 de enero de 1963; hasta la compraventa celebrada entre Inés Lucía Vélez González y Martha Norha Ríos Vélez, del 23% del derecho que aquélla tenía sobre inmueble, equivalente al 16.42% de la totalidad, mediante Escritura pública No. 5918 del 15 de septiembre de 1993 de la Notaría Dieciocho de Medellín, aclarada por Escritura No. 8615 del 27 de diciembre del mismo año, fecha hasta la cual las demandantes Inés Lucía Vélez González, Martha Norha Ríos Vélez y Martha Cecilia Vélez Serna, habían entrado a ejercer posesión sobre un el bien.

No obstante, advirtieron que, a pesar de las negociaciones referenciadas, dichas actoras habían emprendido, de manera separada, la construcción de la edificación que existía sobre el terreno, para ese momento, compuesta de cuatro torres, razón por la cual se solicitada en la demanda la adquisición del inmueble objeto de usucapión en porcentajes determinados y diferentes para cada una de ellas.

Igualmente, expusieron que, en razón de las negociaciones celebradas por las mismas, respecto de los honorarios de quien se había encargado de ejecutar la construcción y la liquidación conyugal de una de ellas, entraron en posesión, también de un porcentaje sobre el bien, los codemandantes Miguel Antonio Carvajal García y Carlos Alberto González Ramírez.

2.- Trámite. La referida demanda fue admitida el 23 de febrero de 2021 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, a quien se le asignó por reparto, en contra de las personas indeterminadas, por lo que en la misma providencia se ordenó el emplazamiento de éstas y la inscripción de la demanda, en el respectivo folio de matrícula del inmueble objeto de la demanda.

El 24 de junio de 2021, se envió por correo nota devolutiva por parte de la

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, del oficio mediante el cual se comunicó la inscripción de la demanda, requiriendo se informara quién ostentaba la calidad parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 591 del Código General del Proceso y 31 de la Ley 1579 de 2012, la cual se puso en conocimiento de la parte demandante por auto del 19 de julio del mismo año, para que procediera de conformidad.

Ante el silencio guardado por la parte demandante, el a quo, mediante auto del 13 de septiembre de 2021, en ejercicio del control de legalidad, estimó necesario proceder al saneamiento de la actuación surtida hasta el momento, al advertir que se había omitido la vinculación de los titulares del derecho real de dominio, como lo mandaba el precepto 375 del Código General del Proceso y, en consecuencia, dispuso que se integrara el contradictorio con Juan Bautista Vélez Acevedo, requiriendo a la parte demandante para que informara los datos que tuviera del citado para efectos de lograr su notificación.

En cumplimiento de lo anterior, el vocero judicial de la parte actora, mediante escrito fechado el 21 de septiembre de 2021, manifestó que dicha parte desconocía cualquier información relacionada con el vinculado oficiosamente por pasiva, razón por la cual y advirtiendo que éste no se encontraba en el Censo Electoral, por auto del 1° de febrero de 2022, ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de verificar si el mismo se encontraba vivo o muerto, y en este último caso, el lugar donde se encuentra registrada la defunción del mismo, en aras de evitar nulidades futuras.

En respuesta al referido requerimiento, la Coordinadora del Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de Identificación de la citada entidad, mediante comunicación del 24 de marzo de 2022, informó que a nombre de Juan Bautista Vélez Acevedo se había asignado la cédula de ciudadanía No. 21989, la cual se encontraba cancelada por muerte, mediante Resolución 4485 del 15 de mayo de 2013, con registro civil de defunción serial 0007469141.

Con fundamento en lo anterior, el juzgado de primer grado, en proveído del 16 de mayo de 2022, declaró la nulidad de todo lo actuado en el presente asunto desde el auto admisorio de la demanda, esto es, 23 de febrero de 2021, por haberse dirigido la demanda en contra de Juan Bautista Vélez Acevedo, quien, de acuerdo con lo informado por la Registraduría, había fallecido seis años antes de

ser presentada la acción y, por ende, carecía de capacidad para ser parte, por lo que debió dirigirse la pretensión en contra de los herederos de éste, al tenor de lo establecido en el artículo 87 del Código General del Proceso; por tanto, en su lugar, dispuso inadmitir la demanda para que se cumplieran los requisitos enunciados en la parte resolutive de la misma providencia.

En escrito remitido el 24 de mayo de 2022, el apoderado judicial de la parte demandante, no obstante advertir no compartir la decisión del despacho, procedió a pronunciarse frente a los requisitos exigidos, en aras de darle continuidad a la demanda, resaltando que dicha parte nunca había dirigido la demanda en contra de Juan Bautista Vélez Acevedo, como podía evidenciarse del contenido del escrito primigenio.

Aunado a lo anterior, adujo que el citado no era titular del dominio sobre la propiedad que se pretende usucapir, pues como se había indicado en los hechos de la demanda, el mismo había adquirido un porcentaje sobre la posesión material en la sucesión de Ezequiel Vélez, tramitado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 27 de septiembre de 1962 y registrada en noviembre 09 de 1962, protocolizada en la Notaría Primera de Medellín a través de Escritura pública No. 365 del 31 de enero de 1963.

Por tanto, arguyó que resultaba inocuo realizar las adecuaciones al poder y la demanda exigidos, con relación a los herederos de Juan Bautista Vélez Acevedo, y aportar los demás requisitos relacionados con dicha vinculación, considerando que éste no era parte de la Litis, por no tener la calidad de propietario como lo señalaba el juzgado.

3.- El auto apelado. Mediante proveído del 17 de junio de 2022, el a quo resolvió rechazar la demanda por no haberse cumplido por la parte actora con los requisitos exigidos en el auto inadmisorio, reiterando la procedencia de la vinculación por pasiva de Juan Bautista Vélez Acevedo, por ser titular del derecho de dominio del bien objeto de usucapión en “*un porcentaje del 8.096.71*” de acuerdo con la anotación 005 del Certificado de Tradición y Libertad del referido inmueble, y de los demás documentos adunados a la demanda, de donde se derivaba que lo adjudicado era una cuota o derecho proindiviso y no una posesión.

4.- La apelación. En contra de la decisión referenciada, la parte

demandante, oportunamente interpuso recurso de apelación, reiterando los argumentos esbozados en el escrito mediante el cual se pronunció frente al auto inadmisorio, para aducir que con lo explicado en el mismo resultaba improcedente el rechazo de la demanda.

CONSIDERACIONES

1.- De los requisitos de la demanda. Enunció el legislador los requisitos que debe contener cualquier demanda, así como los anexos generales que deben adunarse a la misma en los artículos 82 y 84 del Código General del Proceso, respectivamente.

Por tanto, corresponde al funcionario judicial, una vez se le asigne el conocimiento de determinado asunto, verificar el cumplimiento de dichas exigencias, con el fin de evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar la emisión de una decisión de fondo que defina la controversia objeto de debate, evitando nulidades futuras o fallos inhibitorios.

Es decir, la exigencia de unos requisitos mínimos razonables para la admisión de la demanda, busca hacer más viable el derecho de acceso a la administración de justicia, garantizando los derechos de quienes intervienen en el proceso; sin que le sea dable al operador jurídico exigir *“formalidades innecesarias”*, según el mandato del artículo 11 del citado Estatuto Procesal en su parte final.

En este sentido, ha señalado la jurisprudencia que los requisitos para inadmitir una demanda, son estrictamente los enlistados por el legislador y, por ende, no pueden exigirse adicionales²:

“[E]l legislador ha señalado varios correctivos o mecanismos tendientes a que se reúnan los requisitos contemplados en la norma procesal, pues de su inobservancia se producirá la inadmisión y el eventual rechazo.

Por lo anterior, es necesario que el juez señale con precisión los defectos de que adolezca, de suerte que el funcionario tiene a su cargo la labor de

² Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Auto del veintiocho (28) de julio de 2021, Exp. 028-2020-00299-01. M.P. Luis Roberto Suárez González.

particularizar minuciosamente los elementos que deben ser enmendados, para evitar posteriores irregularidades procesales.

*No obstante, dada la naturaleza restrictiva de las normas que dan lugar a la inadmisión, y considerando que el incumplimiento del apremio que ordene corregir las falencias de la demanda (el incumplimiento de los puntos a subsanar), provocan el rechazo de la misma, **las causales previstas por el legislador en la codificación adjetiva son estrictamente taxativas.***” (Resalto intencional).

Ahora, además de los requisitos y anexos que se enuncian en las citadas preceptivas, deben considerarse los que se establezcan de manera especial para un proceso específico, tanto en dicha regulación procesal, como en cualquier otra disposición normativa, conforme lo señala el artículo 82, en su numeral 11 y el artículo 84, en el numeral 5.

Lo anterior, con el fin de que se brinde todos los elementos indispensables al juez cognoscente para que emita una decisión de fondo, esto es, las bases sobre las cuales se adelantará determinado proceso y lo que se pretende con el mismo, además de garantizarle a la contraparte su derecho de defensa.

2.- De la inadmisión y rechazo de la demanda. Contempla el precepto 90 del Código General del Proceso, que el funcionario judicial puede inadmitir una demanda y conceder el término de cinco (5) días para que la parte demandante subsane los vicios de forma que advierta, esto es:

- “1. Cuando no reúna los requisitos formales.*
- 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.*
- 3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*
- 4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.*
- 5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*
- 6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*
- 7. Cuando no se acredita que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.”*

Así mismo, señala que cuando vencido el término legalmente concedido a la actora para adecuar la demanda o cumplir con las exigencias que se enunciaron

en auto inadmisorio, sin que así lo haya hecho, procederá el rechazo de la demanda.

Al tenor de lo establecido en el inciso 5° de la citada pauta, los recursos que se formulen contra el auto que rechace la demanda, proceden igualmente contra el inadmisorio, por ser en este último que se exigen los requisitos omitidos o indebidamente cumplidos, y que sirven con posterioridad, como fundamento al rechazo de la demanda. En esa medida, la alzada es escalonada, en tanto no se concentra estrictamente en el rechazo y abarca la inadmisión, como objeto total del recurso.

3.- Caso concreto. Presentaron Inés Lucía Vélez González, Martha Norha Ríos Vélez, Martha Cecilia Vélez Serna, Miguel Antonio Carvajal García y Carlos Alberto González Ramírez, demanda verbal de pertenencia en contra personas indeterminadas, pretendiendo que se declarara que habían adquirido por prescripción extraordinaria de dominio el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 01N-28204, la cual fue admitida en dichos términos por el a quo.

Ahora, en ejercicio del control de legalidad atribuido al juez cognoscente, se advirtió que se había omitido vincular a Juan Bautista Vélez Acevedo, quien figuraba como titular del derecho de dominio, por lo que se ordenó su integración; sin embargo, al verificarse que el citado había fallecido con anterioridad a la presentación de la demanda, se declaró la nulidad del trámite surtido hasta el momento y en su lugar, se inadmitió la demanda para que fuera adecuada, vinculando a los herederos del causante, exigiéndose los anexos que soportaran dicha modificación y al no observarse lo requerido, se rechazó la demanda.

Efectivamente advierte esta corporación que la parte demandante no cumplió en la oportunidad legal concedida los requisitos exigidos por el a quo en auto inadmisorio; sin embargo, atendiendo que el recurrente insiste en la improcedencia de dichos requisitos, y atendiendo a que, como se indicó con antelación, la apelación que se formula en contra del auto que rechaza la demanda, también comprende la providencia que la inadmitió, se verificará si lo exigido por el juzgado en el auto del 25 de mayo de 2022, procedía como causal de inadmisión, que le permitiera, ante su inobservancia, el rechazo.

Tenemos entonces que, el despacho judicial de primer grado, requirió a la

demandante, so pena de rechazo, el cumplimiento de lo siguiente:

“1. Deberá indicar quiénes son los herederos determinados del señor Juan Bautista Vélez Acevedo, indicando además su ubicación. Ello, en razón al parentesco que ostenta la parte actora con la parte demandada.

2. Deberá dirigir la demanda en contra de los herederos conocidos y los indeterminados del señor Juan Bautista Vélez Acevedo.

3. Por indicar la Registraduría Nacional del Estado Civil que la cedula de ciudadanía del señor Juan Bautista Vélez Acevedo se encuentra cancelada por muerte, se arribará del mencionado registro civil de defunción (para tal fin se aportó el indicativo serial), e informará si ya se inició proceso de sucesión, quienes son sus herederos determinados y allegará la prueba de la calidad en que actúan estos, artículo 84 numeral 2 del C.G.P.

4. Dará cumplimiento a lo copilado en el artículo 87 del Código General del Proceso, ello es, dirigir la demanda contra todos lo que tengan la calidad de herederos del titular de dominio fallecido o sus herederos indeterminados si cuyos nombres se ignoran.

5. Adecuará el poder, los hechos y las pretensiones de la demanda, dirigiendo la misma contra los que figuren como titulares del derecho real sobre el bien que pretende usucapir sus herederos o herederos indeterminados si cuyos nombres se ignoran.”

Lo anterior, cimentado en que, figurando Juan Bautista Vélez Acevedo como adjudicatario de una cuota o derecho en proindiviso sobre el inmueble objeto de usucapión, como se verificaba en los documentos adunados a la demanda, debía ser parte del contradictorio, pero que, habiéndose acreditado su fallecimiento los llamados a resistir las pretensiones de la misma eran sus herederos, por lo que inadmitió la demanda para ajustarla en dichos términos.

Al respecto, resulta necesario clarificar que, de acuerdo con el certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Zona Norte, el 08 de agosto de 2017, a petición del vocero judicial de los demandantes, para el adelantamiento de esta demanda, el bien objeto de la demanda no tenía titular de

derecho de dominio. En este sentido se indicó:

*“En consecuencia sobre el mencionado inmueble que se pretende usucapir; ...identificado en esta Oficina de Registro con la Matrícula Inmobiliaria No. **01N-28204**, de este Círculo Registral; **No Existe Titular De Derecho Real de Dominio**; Toda Vez que la Tradición de este Folio de Matrícula Inmobiliaria, que identifica este inmueble se inició con la anotación Número Uno (1), en la cual da inicio con una Adjudicación Por Sucesión Posesión Material (Falsa Tradición).”*

Es decir, que contrario a lo afirmado por el a quo, Juan Bautista Vélez Acevedo, no figura como titular de derecho de dominio del inmueble que busca la parte demandante le sea adjudicado por prescripción extraordinaria de dominio, y al abrirse el folio con fundamento en una adjudicación por sucesión de posesión material, es esto lo que figura registrado a favor del mismo, tanto en la sucesión de Exequiel Vélez (Anotación Nro. 001), como de Benilda Acevedo Vda. de Vélez (Anotación Nro. 005), sin que conste ninguna negociación al respecto posteriormente, de donde se desprende que para el momento de presentación de la demanda aún continuaba como titular de los porcentajes adjudicados sobre la posesión en cada una de las sucesiones.

Ahora, el numeral 5° del precepto 375 del Código General del Proceso, señala que la demanda debe dirigirse en contra de todas las personas que figuren en el certificado como titulares de derechos reales sobre el bien objeto de usucapión; sin embargo, como la posesión no ha sido catalogado como un derecho real, en principio, resultaba admisible que el demandante no dirigiera la demanda en contra del citado poseedor, como en efecto no lo hizo.

Sin embargo, al tratarse de un poseedor que se encuentra inscrito en el certificado de registro de instrumentos públicos, en aras de garantizar su derecho de defensa, máxime siendo el ejercicio de la posesión lo que en efecto conlleva a que se pueda eventualmente adquirir el derecho real de dominio sobre un bien, la vinculación de aquél de manera oficiosa y por pasiva resulta acertada; y por ende, los datos requeridos por el juzgado de primera instancia, para vincular a los herederos de Juan Bautista Vélez Acevedo, ante el fallecimiento de éste, son apropiados.

No obstante, lo que no resulta procedente, es que se haya exigido a la

demandante dicha información, so pena de rechazo, pues no habiéndose dirigido la demanda en contra del citado poseedor inscrito, sino que su vinculación se produjo de manera oficiosa y con posterioridad a la admisión de la demanda, no existía razón jurídica para imponer a la parte demandante la carga de adecuar la demanda en los términos peticionados por el juzgado de primera instancia; es decir, exigir el cumplimiento de los requerimientos efectuadas con relación a la vinculación de los herederos del citado poseedor, so pena de rechazar la demanda, pues no tenía la actora que adecuar el libelo genitor al no haber incluido como parte resistente a Juan Bautista Vélez Acevedo, ni mucho menos, ser sujeto de la consecuencia de rechazo, al no hacerlo, por cuanto la demanda ya se encontraba admitida.

Nótese que incluso, el deber del juez como director del proceso, de sanear las actuaciones surtidas en un proceso, para evitar la paralización del mismo y el decreto de nulidades, fundamento del control de legalidad de que trata el precepto 132 del Código General del Proceso, fue instituido precisamente en aras de superar los obstáculos procesales, sin necesidad de retrotraer las actuaciones al inicio, sino hasta el punto estrictamente necesario, en aras de la continuidad de las etapas procesales, para efectos de lograr emitir una sentencia de fondo, que cumpliera con la finalidad de los entes judiciales, administrar justicia.

Por tanto, carece de sentido que una vez se adelanten las gestiones tendientes a enderezar el trámite, finalmente se termine declarando la nulidad de lo que se pretendía sanear, pues esto desdibuja, como se indicó el fin de la figura.

También resulta preciso indicar que, al igual que ocurre con el saneamiento, cuando se acuda a la inadmisión de una demanda, debe procurarse el funcionario judicial ceñirse a lo legalmente establecido, en aras de impedir nulidades y fallos inhibitorios, pero evitando traspasar los mismos, degenerando la facultad en una obstrucción a la administración de justicia, de tal manera que no siempre que se inadmita, se genere de manera indefectible el rechazo de la demanda.

Por tanto, no pudiendo exigirse los requisitos antes transcritos como causales de inadmisión, su inobservancia dentro del término señalado para su acatamiento, no podía dar lugar al rechazo de la demanda.

CONCLUSIÓN.

En consecuencia, se revocará la decisión apelada, para, en su lugar, ordenar que el juzgado de primera instancia, imponga a la parte actora el cumplimiento de las exigencias tendientes a la acreditación legal del fallecimiento Juan Bautista Vélez Acedo y la vinculación de sus herederos al presente asunto, en razón de su calidad de poseedor inscrito, y no titular del derecho real de dominio, y sin la consecuencia del rechazo de la demanda, por no haber la actora dirigido su pretensión en contra de aquél y estar admitida la demanda para el momento en que se consideró necesaria la vinculación del citado poseedor inscrito.

No se condenará en costas, por haber prosperado la apelación impetrada por la parte demandante.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **REVOCA** el auto proferido por el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 17 de junio de 2022, dentro del proceso VERBAL de pertenencia instaurado por INÉS LUCÍA VÉLEZ GONZÁLEZ, MARTHA NORHA RÍOS VÉLEZ, MARTHA CECILIA VÉLEZ SERNA, MIGUEL ANTONIO CARVAJAL GARCÍA y CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ, en contra de las PERSONAS INDETERMINADAS, por las razones esbozadas en la motivación y, en su lugar,

RESUELVE.

PRIMERO. SE DISPONE que el juzgado originario se abstenga de solicitar a la demandante los requisitos tendientes a la acreditación legal del fallecimiento Juan Bautista Vélez Acedo y la vinculación de sus herederos al presente asunto, en razón de su calidad de poseedor inscrito, y no titular del derecho real de dominio, y sin la consecuencia del rechazo de la demanda, por no haber la actora dirigido su pretensión en contra de aquél y estar admitida la demanda para el momento en que se consideró necesaria la vinculación del citado poseedor inscrito.

SEGUNDO. Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, reading "MARIO GÓMEZ LONDOÑO". The signature is stylized, with the first letters of each word being capitalized and prominent.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado